



el estadista

24 DE SEPTIEMBRE AL 21 DE OCTUBRE

AÑO 11 / NUMERO 196

\$50.-

@El_Estadista

BUENOS AIRES

ARGENTINA

www.elestadista.com.ar

Escriben Burdman, Degiusti, Scherlis, Tonelli, Zuleta ▲P3-6 y 13

Volver al futuro: El “nuevo” sistema de partidos ▲P13

Massa El lugar clave que ocupa en la coalición oficialista ▲P7

Aborto Temas fuera del polo oficialismo-oposición ▲P10-11

Opinión pública Los números de Fernández en las encuestas ▲P4-5

Estados Unidos Final abierto y posibles impugnaciones ▲P17



LA PUJA POR LOS RECURSOS

▲P8-9

el estadista 196



el estadista // Director **Juan Radonjic** // propietario ESECOM S.A. Paraguay 776 1B - Tel. 4315-0265 / 4313-4404/2168 // info@elestadista.com.ar // www.elestadista.com.ar

carta al lector.

Una respuesta política a los problemas económicos

Los resultados económicos no son alentadores. El PIB de Argentina caerá alrededor del 12% este año, puede ser el mayor retroceso entre los países del G 20 y en la región, sólo Venezuela presenta peores números. El derrumbe del PIB en el segundo trimestre llegó a casi 20%, mientras que la tasa de desempleo trepó al 13,1% en ese período.

No sorprende entonces, que las encuestas muestren un deterioro de la evaluación del Gobierno en su manejo de la economía mientras que recibe buenas calificaciones por la manera en la que enfrentó la pandemia. Enrique Zuleta Puceiro presenta todos los números al respecto en su nota (página 4).

Es cierto que la crisis económica está presente en todos los países, pero en Argentina el deterioro fue mayor con el agravante de haber sufrido una recesión en los dos años previos a que se desatara la pandemia. El arreglo de la deuda fue un éxito del Gobierno reconocido por casi todos los sectores políticos, pero no trajo todas las consecuencias que se esperaban en términos de recrear la confianza en el rumbo de la economía. La confianza debe generarse para todos los sectores, para las empresas y los mercados, pero

también para los sectores populares que no deben tener la sensación de desamparo por parte de las autoridades. Una vez más, el manejo de la política cambiaria complica a un gobierno. Y a las restricciones anteriores para acceder a dólares se sumaron otras para dar forma a lo que se conoce como supercepo.

Si bien hay un debate técnico sobre las distintas alternativas para enfrentar la situación, como pocas veces está tan claro que la respuesta debe provenir desde la política. En primer lugar debe clarificarse el rumbo de la política económica para lo que, curiosamente, la negociación con el FMI, puede ser muy útil. Pero la palabra clave es la del Presidente.

También es el momento de avanzar en acuerdos con distintos sectores ya sea que se haga mediante la demorada constitución del Consejo Económico Social o través de alguna otra instancia. Y es clave en esta etapa, tener definidas las prioridades para no llevar a la sociedad a debates que no contribuyen en un momento en el que toda la energía debe estar puesta en enfrentar la pandemia y sostener la actividad económica. Los errores no forzados son particularmente incomprensibles en esta etapa ▲

#Quedate
EnCasa

 BANCO
Hipotecario
hipotecario.com.ar

El (no) relanzamiento

por Luis Tonelli

La confusión parece imperar en el Gobierno. La cuarentena, que por imperfecta en su aplicación desde su día uno se ha vuelto eterna, parece ser solo efectiva para que no vayan a trabajar los empleados públicos de las tareas no esenciales de la administración pública, que sean racionados muchos de los empleados en grandes comercios y fábricas, y que no se den espectáculos públicos. Después, estamos en una “no cuarentena” como la definió extrañamente el mismo Presidente, quien seguramente con un ojo en las encuestas está tratando de salir de su identificación con el encierro, aunque en un momento su enamoramiento de la medida se reflejó en un tácito “Cuarentena o muerte”.

La mufa social es tal que ni conmueve el número de víctimas del Covid en ascenso, que ya se mide en varios centenares diarios, cuando antes, un puñado de ellos metía miedo a mucho de la población. Todo en lo humano es relativo, hasta la muerte cuando es la ajena, y la reclusión por tiempo indeterminado es insostenible y más cuando empiezan los días lindos. La idea de riesgo está acolchonada por nuestra cultura. Si no hubiera sido así, seguramente estaríamos todavía en la cima de los árboles comiendo plátanos.

No es lugar para entrar en detalles de todos los vientos y huracanes ajenos y propios que Alberto Fernández está enfrentando, pero es evidente que ni el final feliz de la negociación de la deuda externa privada, que se consideraba como el gran espaldarazo de confianza que recibiría el gobierno pudo siquiera revertir en algo las perspectivas económicas negativas. Solo dos cuestiones al respecto. En primer lugar, ha quedado claro para futuras negociaciones que hay un trade off entre los resultados de una tenida fuerte con los acreedores y el tiempo que dura la negociación. Guzmán consiguió un buen arreglo, pero tantos meses de incertidumbre dejaron una base negativa que se expresó en el aumento de la brecha entre el dólar blue y el oficial. Por otra parte, en gran medida fue una negociación exitosa por que la amenaza del default era muy creíble. Postergar el pago de la deuda fue un negocio también para el ala kirchnerista, que lejos de ser derrotada, prosiguió con fuerza su ascenso sobre el Presidente.

Frente a una crisis de confianza el manual de manejo de la Presidencia reza que

hay que producir urgentemente un shock de confianza (aunque el “sarasa” que se le escapó al novel ministro de Economía al presentar ni más ni menos que el Presupuesto se mueve exactamente en la dirección contraria).

En la democracia argentina, desde 1983, hemos asistido a varios “relanzamientos” realizados por los Presidentes y retomar (o tomar) el control de su gobierno. Raúl Alfonsín lo hizo en 1985, cuando anunció la “economía de guerra”. También utilizó esa crisis para hegemonizar su gabinete, quien combinaba al principio pagos laterales para el ala derecha de su partido, con Antonio Troccoli en Interior y el ala izquierda con Bernardo Grispun en Economía. Lo mismo Carlos Menem, cuando después de dos episodios hiperinflacionarios relanzó su gobierno con Domingo Cavallo como superministro de Economía.

Néstor Kirchner, en cambio, se fue desprendiendo de los ministros de Eduardo Duhalde que había mantenido, hasta que dos años después de haber asumido, se sacó de encima el padrino del bonaerense al vencer Cristina Fernández a Chiche Duhalde en las elecciones legislativas. Cristina Fernández con la muerte de su esposo, también dejó de tener esa influencia constante sobre sus actos de gobierno.

El caso de Mauricio Macri es diferente ya que de entrada nombró a un gabinete propio sin mayores pagos laterales a sus socios, y resistió todas las presiones para relanzar su gobierno con un gabinete de coalición. Encima, fragmentó el poder de los ministros, al aumentar el número de ministerios y generar así un presidencialismo segmentado sui generis.

Cosa interesante es que, a pesar de la diatriba contra el “neo-liberalismo” macrista, Fernández parece replicar su misma lógica de gabinete propio y descoordinado. Los presidentes que no se sienten muy poderosos tienden a cortar la libustrina corta para que nadie brille más que él. Con la salvedad que el actual Presidente sufre el pequeño detalle que, como no podía ser de otra manera, el paralelogramo de poder que lo sostiene pasa principalmente por las manos de su vicepresidenta.

Frente a esa realidad, el Presidente está abusando cada vez más de la vieja treta que usaban los marxistas criticando desde la teoría a las consecuencias del capitalismo, en vez de compararlo con las experiencias

comunistas (¡ojo que no estoy insinuando que este gobierno sea comunista, por favor!). Así, Fernández señala el cierre de fábricas durante la época de Macri, o el aumento de la pobreza, o la reducción del PBI (unos 5 puntos menos comparado con el PBI que le dejó su antecesora) y enseguida manifiesta que su gobierno tiene como objetivo reducir la pobreza, ser industrialista e impulsar el crecimiento.

Lo cual, aparece esquizofrénico cuando uno ve los números de espanto que hacen de esta crisis una mucho peor que la del 2001. Por supuesto que está la pandemia como causa inicial, pero el Gobierno hace caso omiso de sus consecuencias para en cambio anunciar que el Estado te cuida contra el mercado egoísta, individualista y malvado. O que el Gobierno te paga el sueldo sin trabajar -lo que sería fantástico de poderse mantener en el tiempo-.

Pero el ilusionismo de las palabras se ha agotado, y emerge la realidad ominosa. Incluso con algo que es tarjeta amarilla para un gobierno peronista: qué le ganen la calle. Y no solo los “banderazos”, que total es gente que no los votaría nunca, sino la rebelión de la sección de la policía bonaerense incorporada mas recientemente y ligada a los intendentes. No hay que ser un amante de las teorías conspirativas para ver las garras ahí de los barones del conurbano disgustados con La Cámpora y Sergio Berni que quieren usufructuar esa ley nacida del Pacto Vidal-Massa que les impide la reelección.

Un relanzamiento de gobierno, entonces, aparece como indispensable. Sin embargo, un verdadero shock de confianza demanda tanto realizar un cambio de gabinete masivo como evidenciar un giro de 180 grados en el rumbo económico, nombrando a un ministro de economía “confiable” por “los mercado”.

Lo cual aparece a todas luces imposible hoy, ante la dependencia política que tiene el Presidente de su Vicepresidenta. Y especialmente, de la prioridad que exhibe de lograr cuanto antes la “impunidad del rebaño” para ella, su familia y colaboradores sobre los que pesan graves causas de corrupción.

Quizás Alberto Fernández se ilusione, como tantos otros presidentes, que la crisis discipline a su coalición y le de poder, ante el peligro de caer todos en el vacío. Lo único que tiene que evitar lo que le ha sucedido a alguno de sus antecesores. Que cuando intente hacerlo ya no sea demasiado tarde ▲



Un balance problemático



ENCUESTA Los apoyos y rechazos al Gobierno muestran diferencias según el tema y están en línea con las preferencias políticas

por Enrique Zuleta Puceiro

El éxito claro del Gobierno en su estrategia de resolución de la negociación con los acreedores externos no parece haberle generado las ventajas políticas que era de prever a la hora de enfrentar la compleja agenda no económica que se plantea a la hora de salida del complejo laberinto de la crisis política argentina. A apenas unas semanas del acuerdo internacional, sus definiciones y posiciones en aspectos tan importantes como el nuevo Presupuesto no parecen haber bastado para generar una batería de consensos internos indispensables como para articular un plan consistente y sobre todo sostenible hacia el corto y medio plazo.

Una vez más, parecería verificarse en el país esa verdadera ley de las sociedades democráticas modernas, según la cual la capacidad de los gobiernos – o de las oposiciones – para generar confianza y apoyos en la sociedad está en relación directa con su capacidad para expresar y transmitir con claridad un sentido claro de la orientación.

En un contexto como el argentino, la sociedad solo está dispuesta a pasar por alto el pasado y los archivos que lo certifican en la medida en que el rumbo esté claro. En el fondo, nadie exige credenciales de ningún tipo. Tampoco planes ni estrategias. Lo que cuenta es la confianza de quienes gobiernan en el rumbo que proponen y su tenacidad para persistir en el empeño y administrar las dificultades. Lo que importa es el sentido de la dirección. En el fondo, es una cuestión de empatía: la gente que confía en sí misma genera de hecho la confianza de los demás, del mismo modo que la gente cansada suele cansar, la gente ilusionada ilusionar o la gente harta, hartar y enfurecer a la sociedad

Llevadas a la coyuntura nacional, estas observaciones resultan imprescindibles para interpretar el derrumbe de las expectativas colectivas que trasuntan los datos de opinión pública que surgen de la docena larga de encuestas nacionales que se publican todos los meses en el país. Para entender la profundidad del problema baste con recorrer algunos datos de la entrega correspondiente a fines de septiembre del Monitor de Tendencias Económicas y Sociales distribuido por la consultora nacional OPSM sobre su panel de 1.200 hogares en todo el país.

Una amplia mayoría de la sociedad tiene una percepción negativa acerca de cómo marchan las cosas en materia económica y social -39,8% mal y 34,6% muy mal- Una proporción que contrasta con el 3,9% que tienen una opinión muy positiva y el 19,9% positiva. El problema político es que esa respuesta negativa alcanza de lleno a la

evaluación de desempeño del propio Presidente. El 28,8% califica de negativo su desempeño general y el 21,8% muy negativo. Los apoyos superiores al 65% que Fernández alcanzó en sus primeros tres meses, incrementados por encima del 75% para su desempeño frente a la pandemia, se estrellan contra sus nuevos números. Su 30,7% positivo y 14,7% muy positivo equivalen a poco más que el núcleo de adhesiones originarias que lo llevo a la victoria electoral. Si hubo un cheque en blanco inicial, el crédito se agotó en apenas un trimestre de gestión, en una curva descendente que se inició en abril, mes muy negativo para todos los indicadores sociales y económicos. Ya de lleno en un año electoral, es difícil avizorar algún horizonte de recuperación.

Las cifras del gobierno nacional en su conjunto son similares: una suma de juicios negativos del 61,5% y positivos del 35,4%. Entre todas las áreas de la gestión apenas se salva la de la pandemia, con el 59,0% de opiniones positivas y 38,8% negativas. Igual reconocimiento alcanza el Gobierno considerado como conjunto en la gestión de la deuda, aspecto en el que alcanza adhesiones del 55,6% y rechazos por parte del 23,9%.

Estas cifras que en definitiva expresan percepciones lógicamente dependientes de la coyuntura podrían ser poco relevantes, pero interesan sobre todo por su conexión directa con otras cifras que reflejan de un modo más directo el clima de desconfianza. Para el 59,9% de la sociedad, el Gobierno ha perdido el control de la economía. El 38,2% juzga que, al cabo de la negociación, el Gobierno ha recuperado el control. De allí que el 60,5% crea que la política económica actual está mal orientada y carece

de rumbo y que sólo el 8,4% considere que está bien orientada o más o menos orientada -27,9-. No es un problema de comunicación o de discurso. Es algo que tiene que ver con fenómenos más profundos de empatía y confianza, difíciles de remontar en una sociedad en el que las redes sociales parecen haber desplazado a otros mecanismos de generación y transmisión de ideas y propuestas.

Lo más significativo es acaso la ratificación en el la sociedad argentina de un patrón de actitudes muy similar al que se verificó en otras crisis de similar profundidad. Más allá de ese clima de pesimismo hacia las cosas y hacia el gobierno en general, la sociedad alienta fuertes expectativas de cambio positivo hacia el futuro. El 44,0% juzga que las cosas mejorarán y sólo cree que empeoraran un pequeño 8,5%. Un porcentaje importante del 43,8% cree que seguirán igual. Al hablar de su vida personal y de sus familias el 51,2% alienta expectativas positivas. El 36,7% cree que empeorara algo y el 9,7 que mejorará mucho. El 55,3% expresa confianza en la capacidad del país para superar sus dificultades actuales mientras que el 24,1% expresa poca o ninguna -19,9%- confianza. La gente cree que las cosas van muy mal en general y mucho menos mal en lo particular. Un síndrome actitudinal no muy diferente al de otros momentos similares de crisis profunda, como las inflaciones de finales de los '80 o el derrumbe de 2001-2002.

Un análisis de las fortalezas y debilidades de las políticas públicas ensayadas por esta primera fase del gobierno Fernández refleja sus ventajas en el plano institucional y de las libertades políticas, desgastadas por todo lo que tiene que ver con

la eficacia y eficiencia económica. En este punto, si hubiera que señalar una tendencia, habría que situar los mayores rechazos en el ámbito de control cambiario y el cierre de importaciones y los mayores apoyos en lo que se refiere a las medidas de protección social y control de los mercados. Un 54,2% está convencido de que el Gobierno está lejos de dar respuestas a las principales demandas de la sociedad y el resto se distribuye entre grados de adhesión variable. Este mecanismo que asocia la crisis de orientación de un gobierno a una sobrecarga de demandas no satisfechas es otro rasgo característico de las crisis argentinas.

El reflejo de este clima en el plano específicamente político es el previsible. Se declaran a favor del gobierno el 39,4% y en favor de la oposición el 37,7%, proporciones no muy lejanas de las que reflejan otros indicadores tales como el apoyo, la afinidad político-electoral o incluso la intención de voto. Cifras todas que permiten prever, a un año de las próximas elecciones intermedias, una competencia altamente polarizada, con ventajas contextuales para la oposición y ventajas posicionales y estratégicas para el Gobierno. La posibilidad de un empate electoral conllevaría dificultades parejas tanto para el gobierno como para la oposición.

Buena parte de las incógnitas que se abren tendrán que ver con las posibilidades de unos y otros sector para sobrellevar la desconfianza de una sociedad desencantada y escéptica. Es hora de un balance urgente, por problemático y duro que sea. Sobran experiencias históricas para subrayar la importancia de estos detalles que pueden parecer mínimos en el comienzo, pero que pueden ser inmanejables en el final. ▲

Suscríbese y reciba **El Economista** en su casa u oficina

Para más información
comuníquese telefónicamente al
centro de suscripciones:
(011) 5273-5214



El mal clima pos acuerdo: ¿es culpa de la política?



DISCURSO Más allá de muchos cuestionamientos, algunos sin sustento, a sus iniciativas políticas, el Gobierno necesita poner sobre la mesa un plan sustentable para lograr un equilibrio macroeconómico

por Julio Burdman

El gobierno nacional logró renegociar la deuda con amplia aceptación de los bonistas, casi unánime, y sacó al país del default. El ministro Guzmán cosechaba felicitaciones por todos lados. Parecía un nuevo comienzo para el gobierno. Sin embargo, pocas semanas después los bonos renegociados están casi al nivel previo a la reestructuración. Cuando el canje se efectivizó, el riesgo país, que estaba por encima de los 2000 puntos básicos, cayó casi mil puntos en un día. Lucía bueno, aunque seguíamos en una tasa imposible. ¿Tal vez era el primer descenso de una escalera más y más descendente? No, porque no paró de subir. ¿Qué pasó? Tal vez, el gobierno esperaba que entrasen dólares después de la renegociación. ¿Acaso pasó algo, un eslabón perdido que ignoramos, entre el canje y la irrupción de Miguel Pesce en el panorama, que disparó las nuevas restricciones para no quebrar? Con irrefrenable optimismo, podemos imaginar que el FMI pidió las restricciones antes de la llegada de un alivio, para que no se pierda. Carecemos de información para reconstruir esas conversaciones palaciegas.

Lo cierto es que salimos del default para ya no estar “aislados del mundo”, y seguimos tan aislados como antes. Como si no hubiéramos salido. Una pregunta dolorosa sobrevuela: ¿para esto hicimos el arreglo? Desde ese momento, todos los ojos comienzan a mirar a la política: la “carencia de liderazgo presidencial”, el “hipervicepresidencialismo”, la “radicalización del kirchnerismo” y otras teorías similares comienzan a circular, con la pretensión de explicar por qué el arreglo con los bonistas “no alcanzó”.

En ese contexto, tras la implementación del neo-cepo y de las restricciones informales al retiro de dólares, y mientras día tras día los indicadores económicos y financieros empeoran, la embajada de Estados Unidos en Argentina publicó un sugestivo tweet. Advirtiendo a los argentinos de las calamidades que podrían suce-

dernos si nos sumamos a la Ruta de la Seda y profundizamos nuestra asociación económica con China. Fue oportuno, porque en esta situación en la que se encuentra el país, la ilusión China podría ser una solución. El Banco Central necesita fundarse, y la propuesta de hacerlo de a poco, exportando recursos naturales manteniendo razonables cuentas fiscales, salarios bajos y costos competitivos, luce cuesta arriba.

Pero podemos reorientar la cámara y verlo desde otro ángulo: ¿por qué un gobierno centrista como el de Alberto Fernández, que nada tiene que ver con las fantásticas etiquetas chavistas que le endilgaron al cristinismo, que arrancó en diciembre con una actitud fiscal austera y convocando a los empresarios, y que llevó adelante una renegociación amigable de su deuda, no despertó la confianza de los mercados? Algunos economistas moderados intentan responder eso con la hipótesis de la asincronía entre centrismo albertista y retórica cristinista. Quienes dicen eso, aseguran que todo el centrismo macroeconómico y financiero de Alberto Fernández, Martín Guzmán, Sergio Choddos, Gustavo Béliz y Felipe Solá resultó opacado por los murmullos de Vicentín, la reforma judicial, el denominado “impuesto a las grandes fortunas”, la declaración de servicio esencial a las telecomunicaciones, las protestas policiales o las columnas periodísticas que aseguraban que “en realidad, Cristina Kirchner se prepara para tomar el poder”. Algo así como que “los políticos populistas arruinaron el buen trabajo técnico de los economistas razonables”. Pero, francamente, esta hipótesis apenas se sustenta en hechos, y no resulta convincente. Lo de Vicentín nunca sucedió, la reforma judicial no tiene reales implicaciones económicas, el debate tributario tal vez fue mal planteado (200 millones de pesos no son una “gran fortuna”) pero tampoco es exclusivo de la Argentina; lo de las telecomunicaciones, sin dudas molestó a los grandes operadores del sector, pero no necesariamente desveló a los empresarios en su conjunto. Y lo de Cristina Kirchner: ¿acaso no

fue ella la que eligió al presidente, respaldó todas sus decisiones, y fue la arquitecta de la alianza entre el kirchnerismo con el sector político preferido por muchos actores económicos con intereses en la Argentina, que es el justicialismo moderado integrado por Massa, la “liga de gobernadores” y el mismo Alberto Fernández? Cristina Kirchner y dio suficientes muestras de moderación. Si lo que esperan es que salga de su bajo perfil y tome la palabra para tranquilizar a los mercados, el resultado puede ser una profecía autocumplida de relevo presidencial y grieta social doméstica. En suma: la hipótesis del “ruido político que afectó a la economía” es débil, y suena a la vieja costumbre de sobrecargar de responsabilidades a los partidos y dirigentes políticos en medio de una grave crisis económica. La gestión Fernández puede estar cometiendo muchos errores, y por momentos pareciera desbordada por los problemas, pero todo sería muy distinto si el Banco Central tuviera US\$ 100 mil millones de reservas, La crisis de 2008 en el hemisferio norte, y sus derivadas en otras latitudes, enseñó al análisis político y económico que las evaluaciones de los mercados se basan en indicadores tangibles de respaldo a la deuda soberana. Lo que importa, al final del día, es la ratio entre deuda circulante y las reservas que pueden usarse para pagar la deuda. Por eso, China y Arabia Saudita, más allá de sus autoridades políticas, sus regímenes y sus conflictos geopolíticos, son confiables para los mercados: porque están colmados de reservas. El gobierno de Macri fue otro ejemplo del nuevo paradigma cada vez más realista en la evaluación de riesgo: por más gestualidad promercado que desplegase, una vez que los números dejaron de cerrar, el dinero se fue.

El liderazgo del gobierno hoy depende de su capacidad de poner sobre la mesa un plan sustentable para revertir el desequilibrio general, macroeconómico y financiero, que azota a la Argentina. Necesitamos plata, y mucha. Es la hora de la creatividad. ▀

El lugar clave de Massa

PERFIL El presidente de la Cámara de Diputados logró una centralidad en la estructura del oficialismo a la que le aporta puntos de vista propios en algunos temas sensibles

por Ramiro Albina

Peronismo y no peronismo. Cuando uno se une y el otro se divide, gana el primero. ¿Qué lugar queda para un tercero en discordia? Poco. Cuando la competencia es centrífuga (hacia los extremos), la avenida del medio se fractura. Cuando es centrípeta (hacia el centro) la avenida se transforma en un pasillo claustrofóbico. Con la voluntad de la política se conjuga la presión de unas estructuras institucionales electorales restrictivas. La estructura bimodal no significa la existencia de un muro de Berlín imposible de atravesar, pero en el año 2019 el 88% de los votos que alcanzaron en conjunto Juntos por el Cambio (JxC) y el Frente de Todos (FdT), parece demostrar que cuando los egos dejan lugar a la búsqueda del poder, se aclara el panorama.

En un contexto donde el mercado laboral está en permanente transformación, “reinventarse” es la palabra de moda. En un escenario político en el que las identidades partidarias se vuelven más líquidas, pareciera que también. La estabilidad laboral del profesional de la política requiere ganar para sobrevivir. Sin embargo, el riesgo de que el realismo político y la rosca se traduzca en una condena a la credibilidad siempre está presente.

La figura de Sergio Massa, presidente de la Cámara de Diputados, ganó visibilidad en las últimas semanas a raíz de algunas discusiones importantes que están teniendo lugar en el Congreso Nacional. La coyuntura política sirvió de disparador para que algunos analistas discutan sobre su rol en el actual gobierno.

Para autores como Juan Carlos Torre y Rodrigo Zarazaga, la candidatura de Sergio Massa en el 2013 era un síntoma de la división de las bases sociales del peronismo. Asalariados registrados y sectores informales. Sindicatos y organizaciones sociales. La fragmentación en la dirigencia tendría anclaje en una fragmentación social. Ante la posibilidad de vol-

ver al poder, el 2019 reunió al polo peronista bajo el FdT. La búsqueda de reunir los votos dispersos perseguía también un fin simbólico: la candidatura de Fernández y la incorporación de Massa fue presentada como un indicador de moderación que contrastaba con la radicalización de la última etapa kirchnerista. Massa, perdió en el camino a varias figuras que lo habían acompañando en su espacio en los últimos años dejando en claro que aspira a construir poder político en el marco de una coalición más amplia. Como señala Luis Tonelli, los dos polos electorales presentan al mismo tiempo un segundo círculo que engloba a un electorado moderado en términos espaciales.

El FdT, con la ambigüedad y contradicción de sus mensajes pareciera buscar prevenir una fractura de su electorado. La figura de Massa parece cumplir un rol en ese sentido. “El Estado tiene que hacer cumplir la ley. Si hay gente tomando tierras tiene que desalojar”, dijo en el programa Antes de mañana (A24) el 30 de agosto, lo que generó luego acusaciones internas cruzadas. “No veo la necesidad de ampliar los miembros de la Corte”, dijo el mismo día en C5N. En temas que generaron una gran polémica política, como el intento de expropiación de Vicentín, Massa se mantuvo al margen de la discusión. Equilibrio.

Además de su peso en la provincia de Buenos Aires, el sector de Massa logró incorporar propios con responsabilidades de gobierno a nivel nacional. Realizado el check-in y con el boarding pass en mano subió a un avión que, luego de una escala en AySA con Malena Galmarini, aterrizaría en el Ministerio de Transporte con varios de sus dirigentes detrás de quien comanda la cartera, Mario Meoni. Haría también pie en Aerolíneas Argentinas con su director, Javier Faroni y en el Enacom con Claudio Ambrosini. Dentro de la Cámara de Diputados, podemos contar a Eduardo Cergnul a cargo de la Secretaría Parlamentaria, Juan Manuel Cheppi en la

Secretaría General, y Raúl Pérez en la Jefatura de Gabinete de asesores de la presidencia de la Cámara. Otro aporte de Massa es que, a diferencia del resto de los integrantes del oficialismo, mantiene una relación fluida con empresarios de mucho peso.

La exposición de Massa como presidente de Diputados puede representarle una oportunidad, pero con la misma facilidad transformarse en un boomerang. El modo de construcción de su liderazgo en la Cámara no es una cuestión menor. El equilibrio entre la actitud de conciliación entre bloques, esperada siempre de quien ocupa su rol, y la necesidad de alcanzar mayorías para aprobar las iniciativas oficialistas con falta de quórum propio, es la clave.

El éxito de esa construcción de la identidad de un nuevo Massa oficialista estará en buena medida atada al éxito del gobierno. Su importancia en la coalición gobernante radica no solo en su contribución a una imagen de gobernabilidad, sino en su anclaje dentro del distrito que concentra el 37% del padrón nacional: la provincia de Buenos Aires. Antes que para sumar votos, su figura es importante para no perderlos.

El peronismo siempre presentó características de coalición. Sin embargo, en el caso del FdT la presencia de sectores divergentes pareciera ser más clara que en experiencias anteriores, lo que acrecienta los desafíos de coordinación. Liderazgos que se referencian en distintas audiencias y con una importante presencia institucional que hace imposibles relegarlos: Cristina Fernández en el Senado, Massa en Diputados y, por supuesto, Alberto Fernández en el vértice desde la presidencia. Detrás de estas cabezas principales en términos nacionales, encontramos también a cada uno de los gobernadores peronistas con peso propio.

Las alternativas de Massa en el 2019 no eran muchas: la dinámica de la competencia amenazaba con un éxodo masivo de dirigentes de su espacio profundizando la falta de anclaje territorial. El analista Lucio Guberman sostiene que “en la Argentina realmente existente, Massa decidió que tenía más afinidades y posibilidades dentro del espacio justicialista que en contra del mismo; entre las ventajas que le ofrece el peronismo está la de carencia de dirigentes nacionales de su generación que, por el contrario, abundan en Juntos por el Cambio”. La presidencia de la Cámara de Diputados constituye una vidriera privilegiada para tejer alianzas y conseguir visibilidad. Siguiendo a Guberman, “ser parte del gobierno le está permitiendo mostrar acción política sustantiva y no solo photo opportunities, y esa práctica puramente política es en la que terminará de tallar su posicionamiento”.

Su tradicional relación con el Presidente y su vínculo reciente con Máximo Kirchner lo convierten en un actor central en el actual esquema de poder, un lugar impensado hasta hace poco ▲

Un nuevo capítulo en la pelea por la coparticipación



DEBATE La quita de recursos a la CABA en medio de los reclamos de la Policía Bonaerense puso nuevamente sobre el tapete la necesidad de una discusión profunda e integral sobre el federalismo fiscal argentino

por Ramiro Albina

El miércoles 9 de septiembre, Alberto Fernández anunció la quita de cerca de un punto de coparticipación a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para la creación de un “Fondo de Fortalecimiento Fiscal de la Provincia de Buenos Aires”. A pesar de que el asunto venía siendo discutido desde hace varios meses, su anuncio se dio de forma sorpresiva y unilateral en medio de una fuerte protesta de la policía bonaerense. Luego de una tarde donde referentes de los principales espacios políticos unieron voces de crítica a la protesta en la puerta de la Quinta de Olivos, la “grieta” volvió para reclamar su lugar. El gigante bonaerense marcaría nuevamente el timming de la política nacional. La discusión sobre el coeficiente correspondiente a CABA tiene origen en una iniciativa del propio gobierno nacional, no en una demanda “desde abajo”. Por lo tanto, la problematización del asunto “desde arriba” lleva a que la primera disputa política sea por el sentido. Solidaridad. Federalismo. Autonomía. Justicia. Arbitrariedad.

La coparticipación federal de impuestos es un mecanismo de coordinación fiscal entre las provincias y el gobierno central que reparte de forma automática determinados recursos recaudados por el segundo. Constituye uno de los pilares fundamentales del funcionamiento de nuestro régimen federal ya que su carácter automático reduce la manipulación política a la que pueden estar sujetas otro tipo de transfe-

rencias de carácter discrecional. La distribución primaria define lo que se distribuye entre Nación y las provincias en conjunto; mientras que la distribución secundaria, define la distribución entre estas últimas. El caso particular de la CABA, es que su participación se detrae de la masa coparticipable neta (no de la distribución secundaria), de manera que su coeficiente es definido por la Nación. De acuerdo a los datos de la Comisión Federal de Impuestos, de la masa coparticipable neta le corresponde el 39,32% al Tesoro Nacional (38,14% hasta el 09/09/2020), el 57,36% a las Provincias, 1% para ATN, y 2,32% a CABA (3,5% hasta el 09/09/2020).

En el año 2016, con la transferencia de las funciones de seguridad, el gobierno nacional encabezado por Mauricio Macri elevó la participación de CABA del 1,4% al 3,75% (luego reducido al 3,5% en el 2017 en virtud del Consenso Fiscal). Con la decisión de Fernández su porción fue reducida al 2,32% (lo que constituiría un 0,92% por las funciones de seguridad, adicional al 1,4%). Sin embargo, la disputa todavía no terminó. El Poder Ejecutivo envió al Congreso un proyecto de ley que busca formalizar el traspaso de funciones de seguridad a la CABA, en el cual se establece que esos recursos pasarían a ser asignados por el Tesoro Nacional (y discutidos por lo tanto en la Ley de Presupuesto) y no por la coparticipación, de manera que el coeficiente correspondiente a la CABA volvería a ser del 1,4%.

La provincia de Buenos Aires es una de

las más perjudicadas del sistema en términos de lo que aporta y lo que recibe. Con la Ley 23.548 (1988) perdió varios puntos de coparticipación con respecto a la ley anterior. Luego se la intentó compensar con la creación del Fondo del Conurbano Bonaerense en 1992 (financiado con el 10% de lo recaudado por el Impuesto a las Ganancias), pero en 1996 se le puso un tope de 650 millones de pesos (la diferencia entre el 10% y esa cifra se distribuiría entre el resto de los distritos, sin incluir CABA) que terminó siendo víctima de la inflación. Así se llegó al hecho insólito de que en el año 2016 se estima que PBA recibió únicamente alrededor del 1,5% de lo recaudado por el Fondo (con el consenso fiscal de 2017 se inició una restitución parcial de ese Fondo para Buenos Aires). El gigante bonaerense, con alrededor de 17 millones de habitantes, también es perjudicado en términos de representación política: con el 38% del electorado a nivel nacional cuenta solamente con el 27% de los diputados y el 4% de los senadores. Sin embargo, plantear la discusión como una disputa entre PBA y CABA (que también recibe mucho menos de lo que aporta) pareciera una pelea absurda guiada por criterios políticos en una lógica oficialismo-oposición.

“Reducir desigualdades para una Argentina Federal”, fue el título de la solicitada firmada por 19 gobernadores en respaldo de la decisión presidencial. No contó con la firma de los gobernadores radicales Gerardo Morales, Gustavo Valdés, y Rodolfo Suárez, así como tampoco del goberna-



dor de Córdoba, Juan Schiaretti. Otro dato interesante fue el escrito emitido por el bloque de legisladores porteños del Frente de Todos en defensa de la medida, al mismo tiempo que intendentes de Juntos por el Cambio de la Provincia de Buenos Aires se manifestaban en contra. La dinámica de competencia bicoalicial pareció haber contribuido a una nacionalización de determinadas agendas.

La medida adoptada por el Presidente generó una ola cuyas consecuencias políticas aún están en su mayoría en la fase de interrogantes sin respuesta. Horacio Rodríguez Larreta se ve por primera vez en un conflicto político a nivel nacional. Su reacción a la decisión presidencial combinó una retórica moderada con una actitud firme de llevar el asunto hasta la Corte Suprema. Por su parte, Axel Kicillof se constituye como un gobernador que presenta una novedad. En una provincia con recursos siempre escasos, el actual gobernador pareció no estar obligado a atravesar el desierto para solicitar recursos a la Rosada, como algunos predecesores de su propio espacio.

EN EL CAMINO DEL FEDERALISMO

El federalismo constituye un mecanismo de división vertical del poder político en el que se reserva cierta soberanía para las unidades territoriales que conforman el Estado. Es inevitable el surgimiento de disputas de coordinación y cooperación, donde los recursos fiscales ocupan un lugar privilegiado. Por esta razón, resulta necesario contar

con reglas claras que no dejen demasiado margen para la discrecionalidad.

Llevamos más de veinte años de incumplimiento del mandato constitucional que, con la reforma constitucional de 1994, estipulaba la necesidad de sancionar una nueva Ley de Coparticipación antes de 1996. La interpretación que sugiere que además de la sanción por el Congreso se debe alcanzar un consenso unánime ratificado por parte de las provincias convierte al status quo en prácticamente inmodificable. Por esta razón, continúa vigente el sistema transitorio establecido por la Ley N° 23.548 de 1988. Sin embargo, muchas cosas cambiaron desde aquel año: creación de nuevos impuestos, transferencias de responsabilidades de gasto a las provincias (como salud y educación), pactos y compromisos fiscales, incorporación de nuevos actores (Tierra del Fuego y CABA), etcétera. La solución que encontraron los sucesivos gobiernos fueron los parches. Cada vez que la discusión sobre el régimen de distribución de recursos sale a la superficie, queda demostrada su arbitrariedad y complejidad.

En las últimas décadas, la tendencia hacia la descentralización del gasto hacia las provincias, tales como salud y educación, no fue acompañada de una descentralización de la facultad de recaudación. Esto terminó generando uno de los aspectos fundamentales que adquirieron las relaciones fiscales intergubernamentales: el elevado nivel de desfase entre la recaudación y el gasto público en muchas provincias. La

falta de autonomía tributaria de ellas cuya dependencia con las transferencias de Nación supera el 70-80% es un claro indicador de este punto.

En la discusión sobre el reparto de fondos existe una tensión entre dos criterios: devolutivo y redistributivo. El primero postula la asignación de recursos de acuerdo al aporte de cada jurisdicción a la masa de recursos; el segundo se basa en el reparto de recurso entre las jurisdicciones buscando satisfacer sus necesidades y reducir asimetrías. Como en muchos ámbitos de la vida, lo ideal sería un punto medio. Dejar libre a cada provincia para que sobreviva con sus recursos propios tendría como consecuencia una profundización de las asimetrías regionales. Sin embargo, no se puede perder de vista la necesidad de mantener ciertos criterios de correspondencia fiscal. Cuando la brecha entre lo que un gobierno recauda y lo que gasta se ensancha y es compensada por transferencias nacionales de un fondo común se pueden generar múltiples problemas, tales como un desincentivo a la recaudación de recursos propios, incentivos a expandir el gasto sin tener que pagar el costo de exigir un mayor aporte a los ciudadanos de su distrito, una menor transparencia, etcétera.

Necesitamos ponernos de acuerdo en un mejor sistema de reparto: fijar un piso mínimo de bienes y servicios, estimar la capacidad fiscal potencial de cada provincia y a partir de ahí discutir sobre criterios objetivos. Hoy nos encontramos con una distribución secundaria que no se guía por ningún criterio objetivo y medible, y una distribución primaria que no tiene verdaderamente en cuenta las distintas responsabilidades de gasto en cada nivel de gobierno. Los coeficientes de distribución fijos, sin criterios objetivos, contribuyen a volver menos transparente al sistema; y la falta de criterios claros lleva a situaciones de judicialización de los conflictos. Una situación recurrente donde las provincias luchan por conseguir mayores recursos de una bolsa común y que, ante la falta de mecanismos de coordinación es el Presidente el que de forma decisionista distribuye, no parece contribuir al objetivo de mejorar el funcionamiento del federalismo.

El federalismo fiscal argentino requiere ser rediscutido. La discusión no debe girar solamente en torno a los coeficientes de reparto sino en una estrategia para abordar la enorme asimetría en el desarrollo productivo, así como también el gigantesco desequilibrio poblacional. La complejidad del sistema actual, que hace muy difícil para el ciudadano poder saber a quién paga sus impuestos y en que (y donde) se gastan, erosiona la rendición de cuentas por el uso de recursos públicos, así como la calidad del vínculo entre representantes y representados ▲

El aborto en la agenda política de la pandemia



DEBATE Qué sucede con la grieta cuando la sociedad debate temas que no se encuadran en los polos oficialismo-oposición, radicalismo-peronismo o kirchnerismo-macrismo?

por Miguel Barrientos (*) y Leonardo Mangialavori (**)

El 1° de marzo de este año, durante la apertura de sesiones del Congreso de la Nación, el presidente Alberto Fernández anunció que en diez días enviaría un proyecto de ley para legalizar el aborto. Pero, poco tiempo después, el coronavirus copó la atención social. El advenimiento de la pandemia y la consecuente parálisis del Poder Legislativo obligaron al gobierno a repensar su agenda, posponiendo el tratamiento del proyecto de interrupción voluntaria del embarazo (IVE).

Para quien impulsa una reforma política, el compromiso ideológico convive siempre con la intención de mejorar su posición estratégica, o al menos conservarla. Manejarse con amplios márgenes de incertidumbre puede tener altos costos políticos que impidan avanzar con la agenda de gobierno. Definir el momento político para habilitar su tratamiento obliga a pensar cuánto capital político se pone en juego con este debate, cuánto se pierde y cuánto se puede recuperar en la ecuación de poder.

Los estudios sobre el Congreso argentino indican que, en ambas cámaras, predomina un fuerte clivaje oficialismo-oposición. El juego de opuestos entre radicalismo y peronismo de las primeras décadas democráticas se reconfiguró tras la crisis de 2001. Kirchnerismo y macrismo redefinieron la política de las dos primeras décadas del siglo XXI en el país. Los resultados de las últimas elecciones reafirmaron la vigencia de esta polaridad. Este es el marco en el que se constituyen y definen los diferentes actores políticos, y se votan los proyectos como el del aborto legal.

DIVORCIO Y MATRIMONIO GUALITARIO

Una tradición surgida con la vuelta de la democracia consiste en que los proyectos de ley que impliquen desacuerdos en términos mo-

rales se voten según el principio de libertad de conciencia, que permite a las y los legisladores excusarse de acompañar la posición de su bloque. Esto posibilita la suspensión temporal del clivaje oficialismo-oposición, favoreciendo otro tipo de alianzas y articulaciones políticas. La historia reciente registra tres casos paradigmáticos: el tratamiento de la Ley de Divorcio Vincular (1986-1987), el de la Ley de Matrimonio Igualitario (2010) y el proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo (2018).

El tratamiento de la Ley de Divorcio Vincular fue un punto de inflexión en la política nacional, a pocos años de la vuelta de la democracia. Cuando el proyecto ingresó a la Cámara de Diputados, emergió una nueva forma de discusión pública de cuestiones del ámbito de la intimidad. El entonces senador Eduardo Menem lo dejó claro cuando expresó que no haría referencias de orden religioso. “No corresponde, estamos tratando este tema en la órbita del César”, dijo durante el debate del proyecto. Por primera vez desde la vuelta a la democracia, se dio libertad de conciencia en la votación.

El tratamiento de la ley fue engorroso y duró diez meses. Además del proceso normal de votación en ambas cámaras, incluyó la vuelta a Diputados, tras modificaciones al proyecto en la cámara alta. Hubo marchas, contramarchas y hasta una visita del Papa al país en abril del '87.

La fuerza de la alianza antidivorcista se mostraba en las calles y en las declaraciones de los dirigentes eclesiales, pero no fue mayoritaria dentro del Congreso. Si bien el proyecto fue impulsado y originalmente redactado por el bloque oficialista, lo cierto es que, además de votos, los legisladores peronistas aportaron a la redacción de la propuesta.

A pesar de que el gobierno otorgó libertad de conciencia, los diputados radicales se

volcaron masivamente en favor del proyecto (127 de los 130), mientras los peronistas se dividieron sobre la propuesta. La votación resultó una paliza en ambos recintos.

El peronismo de esos años buscaba adaptarse a los nuevos tiempos, y las internas entre renovadores y ortodoxos le daban aires de iniciativa al gobierno de Alfonsín. Pero 1987 sería un año bisagra para el oficialismo: a la ley de divorcio, le siguieron momentos muy duros de inestabilidad institucional, con los levantamientos carapintadas como lamentables protagonistas. En las elecciones de septiembre, el oficialismo perdió el quórum propio. El peronismo siguió firme en la cámara alta y herido en Diputados, pero con mayor capacidad para recomponerse.

Veintitrés años más tarde, en 2010, el proyecto de Matrimonio Igualitario despertó una polémica similar, que atravesó las estructuras de los partidos y atrajo hacia la arena del debate parlamentario a movimientos sociales y religiosos, obligando a poner nuevamente en funcionamiento músculos fuera de forma.

El debate fue reñido y no faltaron las presiones de la jerarquía eclesial. La presencia del entonces diputado Néstor Kirchner en el recinto fue decisiva para el acompañamiento de la bancada oficialista. El expresidente fue una pieza clave en la construcción de los acuerdos dentro del bloque. Pero la medida continuó ensanchando la grieta dentro del peronismo: Graciela Giannettasio, Hilda Aguirre de Soria y José María Díaz Bancalari fueron algunos de los 30 integrantes del Frente para la Victoria (FpV) que se opusieron al proyecto del Ejecutivo. Graciela Camaño, Jorge Obeid y Ramón Puerta lo hicieron desde el bloque del Peronismo Federal. El proyecto obtuvo media sanción en Diputados, por una diferencia de 16 votos (126 a 110).

A pesar de la fuerte confrontación que se

vivía desde el debate por las retenciones móviles en 2008, en ambas cámaras la oposición hizo su aporte para la sanción del proyecto oficialista: Patricia Bullrich, Laura Alonso, Margarita Stolbizer, Roy Cortina, Ricardo Alfonsín y Ricardo Gil Lavedra, entre otros, apoyaron el proyecto.

Dos meses más tarde, en una sesión que se extendió hasta la madrugada, el Senado lo convirtió en ley con 33 votos afirmativos contra 27 negativos (de estos últimos, 6 fueron del FpV). La senadora Hilda “Chiche” Duhalde y sus pares Ernesto Sanz y Gerardo Morales acompañaron la iniciativa.

No es fácil determinar el impacto que este debate produjo al interior de cada una de las fuerzas políticas, y más difícil aún es definir su duración, pero algunos datos son contundentes. En la bancada del FpV, quienes votaron en contra del proyecto oficialista registraron un alto nivel de ausentismo en las sesiones posteriores a su votación. Además, su disciplina partidaria fue 15,3% menor que la de quienes lo apoyaron.

VERDES Y CELESTES

En 2018, el Congreso debatió por primera vez en el recinto la interrupción voluntaria del embarazo (IVE), pero a diferencia de los casos de Divorcio Vincular y Matrimonio Igualitario, no se trató de una iniciativa presentada por el Poder Ejecutivo. Su redacción fue colectiva y consensuada entre las organizaciones que forman la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, buscando la despenalización y legalización de dicha práctica. El proyecto accedió al recinto luego de seis intentos fallidos. En esos meses de trabajos legislativos, sucedieron marchas multitudinarias a favor y en contra.

La maratónica sesión en Diputados se prolongó 23 horas. Por 4 votos de diferencia, una mayoría dio media sanción al proyecto, que pasó al Senado para su tratamiento. En agosto de ese año, a pesar de sumar 31 voluntades, 38 senadores frenaron el proyecto.

El oficialismo no fue quien aportó más votos afirmativos: apenas poco más de un tercio de sus legisladores sostuvo su apoyo a la IVE (8 en el Senado y 42 en la cámara baja). Durante el debate, no se vieron figuras fuertes del Ejecutivo “militando” la causa abortista e, incluso, no hubo declaraciones del presidente en su favor. Daniel Lipovetzky, uno de los grandes mosqueteros del voto afirmativo, se quedó fuera de las listas nacionales para renovar su banca: haber militado el proyecto le costó bajar un nivel en la esfera federal para pasar a desempeñarse como legislador provincial.

La ambigüedad con la que el gobierno sobrellevó el tratamiento del proyecto generó un juego de sospechas que sin dudas influyó en las relaciones entre los integrantes de su bloque y, probablemente, haya tenido que ver

con el alto ausentismo durante las sesiones posteriores al tratamiento del proyecto, y la caída en los índices de disciplina del bloque oficialista. El gesto más evidente de la falta de compromiso con el proyecto lo tuvo el propio Mauricio Macri en el debate presidencial de 2019, al manifestarse contra el aborto.

DOBLARSE SIN ROMPERSE

¿Cuánto pone el gobierno en juego en el Congreso al habilitar este debate impostergable? En el camino hacia la aprobación, debe gestionar voluntades de legisladoras y legisladores para lograr que un proyecto como este vea la luz, reduciendo los riesgos que pueda generarle.

Desde 2003, la tasa de disciplina partidaria anual del oficialismo en ambas cámaras suele superar el 75%. El Senado cuenta con miembros un poco más autónomos de las posiciones del bloque con respecto a la cámara baja, pero no se puede desmerecer su apoyo a las iniciativas partidarias. Un punto a tener en cuenta son los vaivenes que se ven entre los años pares e impares. Estos últimos, fuertemente marcados por la contienda electoral, muestran mayor dificultad para aprobar las iniciativas del oficialismo.

Ante la libertad de conciencia, las legisladoras y los legisladores, acostumbrados a una lógica de abroquelamiento, se encuentran con una autonomía inédita que puede generar rispideces (a veces, insalvables). Los casos evidencian que esta tradición permite atraer votos de la oposición sin perder los propios. Además, mantener la solidez del bloque luego del debate parece más fácil para el oficialismo, que organiza a su tropa distribuyendo premios y castigos, mientras que la oposición se abroquela sobre cierta afinidad ideológica y la esperanza de alguna chance electoral en años venideros. Si el oficialismo puede enfriar el conflicto interno y mantener su solidez, será la oposición la que empiece a hacer agua después de la discusión.

El debate sobre el aborto no está exento de riesgos para el gobierno. Según un relevamiento de Clarín publicado el 2 de marzo pasado, 28 de los 119 diputados del Frente de Todos (FdT) son “celestes”, y en el peronismo no kirchnerista hay tan solo 3 votos “verdes”. Es muy difícil que el oficialismo atraiga legisladores opositores a sus filas, y también es incierto el daño que el debate puede producirle a Juntos por el Cambio. El debate de 2018 le significó un problema, aunque quizás esto haya sido provocado por la posición ambigua y el difícil juego de equilibrios que planteó Macri. Que el proyecto sea presentado por un gobierno de otro signo político no necesariamente producirá el mismo efecto.

Según el relevamiento de Clarín, la diferencia en el Senado es de un único voto, pero para Infobae habría 35 senadores que votarían contra la propuesta y 32 a favor. De ser así, el FdT estaría obligado a requerir el

cambio de postura de 3 senadores para forzar el empate y la definición de la vicepresidenta. El momento para tratar el proyecto también dependerá del tiempo que necesite el gobierno para convencerlos de que, al menos, se abstengan o ausenten.

Forzar a legisladores para que voten en contra de sus principios tiene un costo difícil de calcular. Una ruptura de bloque es improbable, pero existen otras formas de manifestar descontento. Una menor disciplina partidaria o elevado ausentismo podrían complicar el panorama del gobierno. No debería olvidarse que, a veces, solo se necesita alcanzar el quórum, cosa que puede resultar más difícil si el legislador está a desgano.

Pero gobernar es tomar decisiones arriesgadas que alteran el status quo y generan beneficiados y perjudicados, tanto por el contenido de las propuestas como por los tironeos en torno a esas decisiones. El capital político, como cualquier capital, sólo tiene razón de ser si se lo usa; es una condición de poder que se hace efectiva en la medida en que se ejerce. A cada momento de la gestión le corresponden diferentes grados de autonomía, capacidad de acción y distintas dosis de capital político.

Todo indica que palabras como aislamiento o distanciamiento social seguirán resonando algunos meses más. Ante el fin de la luna de miel de inicio de mandato, y con un horizonte de renegociación de la deuda con el FMI, reforma judicial, votación del presupuesto 2021, un potencial impuesto a las grandes fortunas y posibles medidas de reactivación económica, el tratamiento de la IVE parece perder terreno. Pero los datos muestran que dar este debate en un año electoral puede tener un costo mayor para el gobierno, a la vez que aumenta la imprevisibilidad sobre su aprobación.

Esperar más tiempo implica la incertidumbre de un año electoral, con un panorama en el que los números verdes pueden volver a cambiar. Si las urgencias provocadas por la pandemia obligan a demorar el debate, el momento más favorable para el proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo podría llegar recién luego de las elecciones legislativas de 2021 aprovechando, en caso de que se produzca, el contexto de una nueva luna de miel.

Los tiempos de la política no siempre coinciden con las necesidades de la sociedad, y postergar demasiado el debate podría tener un saldo aún más negativo para el oficialismo y, especialmente, para quienes no ven reconocido su derecho ▲

(*) *Doctor en Ciencia Política (USP, Brasil y profesor e investigador de la Universidad Abierta Interamericana (UAI) y trabaja como asesor en la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires*
(**) *Licenciado en Ciencia Política de la UBA y Magíster por la Universidade de Brasília (UNB)*

Celebrity Power



NOMBRES Si hay una política de Estado desde la recuperación democrática es que todos los espacios políticos han tenido candidatos del mundo del espectáculo en sus boletas

por René Palacios

En la primera película de la inolvidable trilogía “Volver al futuro”, un desesperado Marty McFly intenta convencer al Doctor Brown que llegó al año 1955 en una máquina del tiempo. Sin poder creer en lo que decía el adolescente, el científico pone a prueba su relato y lo interroga.

- Entonces, dime “Hombre del futuro”, ¿quién es el presidente de los Estados Unidos en 1985?

- Ronald Reagan.

- ¿Ronald Reagan? ¡El actor! Y quien es el vicepresidente, ¿Jerry Lewis?

Lo que al doctor Brown le parecía algo difícil de creer en 1955, hoy parece algo normal. Un millonario y expresentador de un reality show es el Presidente del país más poderoso de la tierra. Una mítica actriz porno ganó una banca en la octava economía mundial. Un poeta se convirtió en el Primer Ministro de la democracia más grande del mundo. Hace menos de doce meses, un actor cómico sin ninguna experiencia previa se convirtió en el presidente de Ucrania. Las celebridades ya son parte del poder.

Por estas pampas no nos quedamos atrás: desde 1983, un famoso cantante popular fue gobernador de una de las provincias más importantes del norte y después candidato a vicepresidente. Un expiloto de Fórmula 1 dominó por más de una década la política santafesina y el actual embajador en Brasil, no solo fue dos veces gobernador de la provincia más importante del país sino que estuvo a dos puntos de vivir en la Quinta de Olivos. Eso, sin contar la enorme cantidad de legisladores e intendentes que alcanzaron sus mandatos provenientes del mundo del espectáculo, la música o los medios de comunicación. Ningún partido puede arrogarse la exclusividad de este escenario. Si hay una política de Estado desde la recuperación democrática es que todos los espacios políticos han tenido este tipo de candidatos en sus boletas. El que esté

libre de famosos, que tire la primera piedra.

En los últimos meses varios personajes provenientes del mundo del espectáculo han anunciado que quieren ser parte del proceso electoral del año que viene. La mediática Cinthia Fernández ya anunció que será candidata a diputada nacional por la provincia de Buenos Aires. La conductora y actriz Florencia de la V dijo que quiere “aprovechar la voz poderosa” que tiene para cambiar la realidad. Y hasta se rumoreó que Diego Maradona podría dar, finalmente, el paso a la política electoral en las elecciones que se avecinan.

Aunque el tema da para más, en esta columna nos vamos a enfocar en dos aristas del fenómeno de los personajes que, con origen en el mundo de las estrellas mediáticas, deciden dar el salto a la política electoral: ¿Cuáles son las condiciones que se tienen que dar para el surgimiento de este tipo de candidaturas? Y, ¿son buenas para la democracia?

David Marsh y Paul ‘t Hart identificaron tres condiciones que ayudan o condicionan el surgimiento de este tipo de candidatos: una institucional, una electoral y una personal.

La institucional tiene que ver con el poder que tengan los partidos políticos para mediar entre las aspiraciones de los mediáticos y su oficialización final como candidatos. Y ese poder, en Argentina, no es poca cosa. Los que quieran aspirar a tener un cargo electivo deben saber que sin el apoyo de una institución partidaria será casi imposible. Por lo tanto, el camino no es la aventura personal, sino sumar desde adentro de un espacio establecido.

La segunda condición tiene que ver con el contexto electoral. En un escenario de mayor desconfianza y hartazgo con la política, es más factible que haya más celebridades dispuestas a participar y espacios políticos dispuestos a abrir sus listas. El último informe de la consultora Zuban Córdoba y Asociados tiene un dato significativo: casi un sesenta por ciento de los encuestados no se siente representado por ningún espacio político en la actualidad. ¿Teléfono para El Dipy?

En tercer lugar está el problema de cómo

posicionar la vida pasada de los famosos en el escenario de su nuevo rol. Cuanto mayor sea el desfase entre su vida anterior y su nuevo papel, los mediáticos enfrentarán más problemas a la hora de generar confianza y credibilidad con el electorado. ¿Significa esto que un cantante de cumbia le será más difícil ser candidato que a un periodista de televisión? No necesariamente, aunque siempre hay que ver cuál es la cultura política del distrito donde se dará la contienda.

Otro debate es si el hecho que figuras que no vienen de la política tradicional sean parte del proceso es bueno (o no) para el sistema democrático. La biblioteca está dividida. Neil Postman ya se quejaba en 1985 de que la entrada de este tipo de liderazgos mediáticos a la política formal era una personificación de la banalidad y un empoderamiento de la imagen por sobre la sustancia. Para ser concisos: para esta corriente la entrada de este tipo de personajes degrada el debate político.

Sin embargo, no todos piensan igual. Otra corriente argumenta que la participación de este tipo de personajes genera una oportunidad poco ortodoxa, pero potencialmente eficaz, para romper el control de la agenda pública de parte de las elites. Por otro lado, el perfil popular de esas candidaturas tiene la capacidad de acercar los asuntos públicos a los segmentos más apáticos de la sociedad y podrían darles una voz a los sectores más marginados de la sociedad. El debate sigue abierto.

Volviendo a Reagan. En la parte final de su presidencia, al “Gran Comunicador” le preguntaron en una entrevista:

- Usted es el único actor de cine que conozco que después llegó a un cargo electo de primer nivel. ¿Ha aprendido algo como actor que le haya servido como Presidente?

- Estoy tentado a decir algo aquí... Iba a decir que hubo veces en esta oficina donde me he preguntado cómo podría haber hecho este trabajo sino hubiera sido actor.

El futuro llegó hace rato. Aunque el Doc no lo crea ▲

Volver al futuro: el “nuevo” sistema de partidos



ESCENARIO Desde 2015, en Argentina se fortaleció la competencia bipolar, en la que dos coaliciones concurren a las elecciones con expectativas razonables de ganar, un esquema similar al de los '80

por Gerardo Scherlis y Danilo Degiusti (*)

El sistema de partidos argentino supone un desafío para quienes intentan analizarlo. Hasta el propio Philippe Schmitter, como suele recordarse, ha confesado su frustración por no poder comprenderlo. Más recientemente, prestigiosos colegas con distintas perspectivas han coincidido sobre la creciente complejidad del caso. Andrés Malamud y Miguel de Luca afirman que éste “desafía la capacidad analítica de observadores y especialistas”, mientras para Carlos Gervasoni “El sistema partidario actual es más difícil [que el de los primeros años de la democracia] para que los académicos lo describan y para que los votantes puedan encontrarle sentido”.

Luego de un bipartidismo estable en la década del '80, el análisis comenzó a complejizarse a mediados de los '90 y se volvió un desafío arduo a partir de la crisis de 2001. El sistema de partidos mostró una estructura de competencia más abierta, con actores nuevos y alianzas cambiantes y novedosas. Los partidos también se personalizaron, perdieron consistencia y capital simbólico, de modo que el electorado dejó de valorar positivamente sus tradicionales etiquetas. Desde la segunda mitad de la década del 2000 el peronismo adquirió la caracterización de partido predominante en la competencia presidencial. Pero el ciclo reciente de 2015-2019 parece mostrar una reversión de estas tendencias.

La gran novedad de este corto período es el reequilibrio del sistema partidario nacional en términos de dos coaliciones nacionalizadas que concentran los apoyos electorales: la del no peronismo unificado en Cambiemos y la del peronismo unificada finalmente en el Frente de Todos. Estas coaliciones de partidos muestran fluidez en los nombres de algunos de sus protagonistas, e incluso de sus etiquetas, pero suponen un grado de estabilidad en la competencia mayor al de cualquier otro par de elecciones presidenciales desde 1989. Ambas concentraron el voto presidencial ya en 2015, y aún más en 2019, cuando el apoyo hacia

las dos primeras fuerzas alcanzó el mayor porcentaje desde 1983. La elección presidencial de 2019 mostró el mayor grado de nacionalización desde 1983, aun cuando cada coalición es especialmente fuerte en distintas regiones del país.

Los sistemas de partidos no son meros reflejos de preferencias pre-establecidas; la acción de los propios partidos contribuye a encauzar dichas preferencias. En 2015 los principales actores del polo no peronista reconfiguraron la estructura de la competencia construyendo una alternativa competitiva frente al largo predominio del peronismo. A su vez, el triunfo de Cambiemos y la posibilidad de la reelección de Macri obró en espejo llevando a los liderazgos peronistas a producir una alternativa unificada. De este modo se fortaleció la competencia bipolar, en la que dos coaliciones compiten con expectativas de ganar. La reducida volatilidad entre las elecciones presidenciales de 2015 y 2019 es un indicador de estabilidad del sistema en este período. La novedad es sin embargo relativa, en tanto la competencia se estructura sobre la base de la dimensión clásica de la política electoral argentina, que tiene lugar entre el peronismo y el no peronismo, y en los términos más habituales y extendidos en las democracias contemporáneas, de gobierno versus oposición. La mayoría de los argentinos no se reconoce en una identidad partidaria específica, pero el eje peronismo-no peronismo articula las opciones efectivas de gobierno y continúa funcionando como campo de significación para el electorado, tanto en términos de identidad positiva como negativa. La cercanía con cada una de esas opciones mantiene una fuerte correlación con indicadores socio-económicos. Por otra parte, en el ciclo analizado esta distinción coincide — más que en otros anteriores — con el eje izquierda-derecha: los apoyos a la coalición peronista se ubican algo más cerca de la primera de esas categorías y viceversa. La polarización producida en la arena presidencial ha generado una reacción en las arenas provinciales, en las que destaca la pensión de algunos gobernadores

a eludir alineamientos permanentes profundizando su autonomía política (típicamente desdoblado elecciones). Esto ha producido mayor incongruencia en las dinámicas sub-nacionales respecto a la nacional. Aunque subsiste el histórico predominio del peronismo en la mayoría de las gobernaciones, se observa también un marcado crecimiento de fuerzas gobernantes que pretenden aparecer como entidades provinciales.

Finalmente, la arena legislativa se encuentra atravesada por ambas dinámicas. Los legisladores nacionales son elegidos en las provincias, lo cual tiende a su fragmentación. Pero esa tendencia se ve balanceada por los esfuerzos de los liderazgos nacionales, en especial del presidente, para forjar coaliciones legislativas. La tendencia a la integración es más fuerte en el caso de la coalición que controla el gobierno nacional; lo contrario ocurre con quien está en la oposición. La formación de interbloques es, en el ciclo estudiado, la forma común de lidiar con ambas dinámicas, permitiendo al mismo tiempo la pluralidad de bloques y la reunión alrededor de los dos polos principales. En definitiva, nuestro sistema de partidos parece recuperar rasgos “ochentosos”; si observamos el formato y dinámica de la competencia presidencial; sin embargo, el tiempo no pasa en vano: las grandes escuderías nacionales son coaliciones partidarias, el Congreso está polarizado en interbloques pero a su vez fragmentado en bloques, y a nivel sub-nacional, son cada vez más las provincias que se desenganchan de la competencia nacional. De todos modos, bajo cualquier definición el avance en términos de institucionalización con respecto al período inmediatamente anterior es evidente. Dirá el futuro si es un ciclo corto o perdurable ▀

(*) Esta nota sintetiza las conclusiones del artículo “Desandando caminos. Reequilibrio de fuerzas y alternancia en el sistema partidario argentino, 2015-2019”, *Colombia Internacional*, N. 103 (2020), pp. 139-169, <https://doi.org/10.7440/colombiaint103.2020.04>


El Economista diario

Suscripción digital

Lee **El Economista** en cualquier momento y lugar



Más información: **digital.eleconomista.com.ar**

POWERED BY  publica.la

Huellas, pasos y camino



AVANCE La ratificación del Convenio 190 de la OIT sobre violencia y acoso en el mundo laboral por parte de Argentina constituye un progreso significativo para asegurar derechos

por Carla Pitiot (*)

Mientras escribo estas líneas se espera la sanción definitiva en el Congreso de la Nación Argentina de la ratificación del Convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo sobre violencia y acoso en el mundo laboral. El primer instrumento internacional que aborda la violencia laboral por razón de género.

Que Argentina se convierta en el tercer país en ratificar este convenio es, sin dudas, más que importante y contribuirá a garantizar el derecho de los trabajadores y trabajadoras a un ambiente laboral libre de violencia como condición en el camino hacia la igualdad.

La OIT aprobó este convenio en junio de 2019 y entrará en vigencia en junio de 2021, al cumplirse un año de la ratificación de Uruguay y Fiji. Desde las organizaciones sindicales vivimos el logro de su aprobación como una respuesta al reclamo sostenido por más de una década con el fin de contar con instrumentos eficaces que nos garanticen prevenir y eliminar la violencia y el acoso en el mundo del trabajo.

Desde que se adoptó el Convenio el año pasado las organizaciones sindicales trabajamos intensamente para difundir el porqué de su relevancia y avanzar paso a paso hacia su ratificación. Se realizaron actividades, charlas, inclusive actos en la CGT, teniendo en cuenta su enfoque integral que contempla la perspectiva de género.

El Convenio está en sintonía con la Agenda 2030 propuesta por Naciones Unidas que apunta a lograr el trabajo decente como uno de sus Objetivos. Es cierto que este contexto de pandemia que estamos atravesando nos obligará a replantear el modo de alcanzar las metas propuestas, pero también es cierto que difícilmente podamos alcanzar este objetivo sino erradicamos la violencia laboral.

Es novedoso principalmente porque plantea la violencia y el acoso por motivos de género, entendiéndolo como “la violencia y el acoso que van dirigidos contra las personas por razón de su sexo o género, o que afec-

tan de manera desproporcionada a personas de un sexo o género determinado, e incluye el acoso sexual”.

También aborda la violencia doméstica, un dato sumamente interesante para avanzar en convenios y legislación sobre la licencia por violencia de género. En el Preámbulo detalla entre sus considerandos “que la violencia doméstica puede afectar al empleo, la productividad así como la seguridad y salud, y que los gobiernos, las organizaciones de empleadores y de trabajadores y las instituciones del mercado de trabajo pueden contribuir, como parte de otras medidas, a reconocer, afrontar y abordar el impacto de la violencia doméstica”.

Inclusive, en la Recomendación 206 de la OIT, cuyas disposiciones complementan el Convenio, sugiere a los Estados generar “programas destinados a abordar los factores que aumentan la probabilidad de violencia y acoso en el mundo del trabajo, como la discriminación, el abuso de las relaciones de poder y las normas de género, culturales y sociales que fomentan la violencia y el acoso”.

Hasta ahora en Argentina contamos con leyes en algunas jurisdicciones, pero la ratificación del Convenio obligará a adoptar y adaptar la normativa nacional y políticas públicas que garanticen la prevención y eliminación de la violencia en el mundo del trabajo, el derecho a la igualdad y no discriminación en el empleo.

Una tarea que requerirá de consensos y principalmente de voluntad política. Sin embargo, las experiencias de iniciativas provinciales, de organismos nacionales, empresas y de organizaciones sindicales podrá ayudar a que antes que tarde se cuente con una ley nacional contra la violencia y el acoso laboral.

Asimismo, debemos repensar la violencia laboral en el marco de la modalidad de teletrabajo; con sus novedosas connotaciones e implicancias lo cual también se presenta como un gran desafío sobre un futuro incierto que nos plantea una manera completamente diferente de vincularnos laboralmente.

Se deberán seguir generando propuestas

en conjunto para implementar mecanismos y protocolos integrales de abordaje de la violencia laboral; que hasta el momento y en muchos casos terminan siendo la única herramienta con la que cuentan los trabajadores y trabajadoras para repeler situaciones que afectan su desempeño, su trabajo, y la conciliación armoniosa entre su vida personal y laboral sin afectar sus derechos.

El rol de los sindicatos para aplicar el Convenio será fundamental. Está planteado en el espíritu de los documentos de la OIT y se trata de un compromiso asumido ya desde hace mucho tiempo, inclusive desde mucho antes de contar con instrumentos internacionales que respalden la lucha contra la violencia laboral.

Este Convenio, además, sienta las bases para plantear futuros instrumentos normativos sobre la Violencia Laboral Objetiva, entendida como la violencia que pueden padecer los trabajadores y trabajadoras de la administración pública cuya principal tarea es el control y la lucha contra la corrupción. Iniciativa que APOC viene impulsando tanto a nivel nacional como internacional; en pos de la protección de los trabajadores del control y que lo llevó a participar directamente en la discusión del texto del Convenio que finalmente se aprobó.

La sanción del proyecto de ley que aprueba la ratificación del Convenio es el último paso en el camino formal que comenzó el año pasado en Ginebra, pero abre un nuevo escenario para su real y verdadera implementación.

Nos implica, nos compromete e interpela sobre la capacidad de llevar adelante acciones creativas de participación que estén a la altura de los desafíos que el futuro del trabajo traen aparejados para el mundo laboral; no solo para trabajadoras y trabajadores del presente sino también para que las nuevas generaciones se encuentren en condiciones y preparadas para los cambios y transformaciones que todos deberemos afrontar con responsabilidad y diálogo abierto.

(*) *Dirigente sindical de APOC. Diputada Nacional (MC)*

Trump vs. Biden, un final abierto

TENDENCIA Las encuestas siguen favoreciendo al candidato demócrata, pero las elecciones son competitivas en varios estados decisivos para lograr la mayoría en el Colegio Electoral

Antes de la pandemia, Donald Trump marchaba cómodo a obtener a reelección de la mano del buen desempeño de la economía. Pocos meses después, como consecuencia de su pésimo manejo de la pandemia, su derrota parecía inevitable. Pero cuando falta algo más de un mes para las elecciones, el resultado está abierto. Según el promedio de encuestas que elabora el sitio Real Clear Politics, la ventaja de Joe Biden en la intención de voto es de 7,1 puntos y en los distritos decisivos es de 3,8%.

La distribución de las preferencias se mantiene estable con Trump predominando entre los hombres blancos, los que tienen menos años de estudio y en las zonas rurales mientras que Biden predomina entre las mujeres, los más educados, las minorías y en las grandes ciudades. De todas maneras, algunos segmentos del electorado cuyo apoyo a un determinado candidato parecía blindado, comienzan a mostrar algunas fisuras. Los demócratas se ilusionan con cierta pérdida de respaldo a Trump entre los votantes blancos que fueron los que lo llevaron a la Casa Blanca hace cuatro años. De la misma manera, los republicanos creen que el Presidente está avanzando entre los votantes hispanos, por lo que perdería por una diferencia menor en ese segmento que será la minoría con más peso electoral este año.

El gran dato a favor de Biden sigue siendo que sólo el 45% de los estadounidenses aprueba la gestión de Trump, un porcentaje insuficiente para obtener una reelección, porque cuando compite un presidente, la evaluación de su primer mandato es el principal determinante del voto. Si bien Trump recibe buenas calificaciones en el manejo de la economía, su respuesta frente al coronavirus, que ya provocó más de 200.000 muertes en Estados Unidos, es duramente criticada.

En el tramo final de la campaña se incorporó un nuevo conflicto al abrirse una vacan-

te en la Corte por la muerte de Ruth Ginsberg. Los demócratas consideran que no se puede nombrar a un nuevo miembro de la Corte a pocos días de unas elecciones presidenciales en las que también se renovará un tercio del Senado que es el que debe aprobar la designación. Pero Trump está dispuesto avanzar rápido y designar al nuevo integrante de la Corte antes de las elecciones y en este punto cuenta con el apoyo de la gran mayoría de los republicanos que no quieren dejar pasar la oportunidad de nombrar un juez conservador y darle de esa manera una clara orientación conservadora al tribunal por muchos años. Un elemento más que se agrega a un escenario altamente polarizado.

De todas maneras, los grandes interrogantes están concentrados en aquellos estados que todavía son considerados competitivos y que definirán el Colegio Electoral al que se le presta más atención que antes luego de la experiencia de 2016 cuando Trump obtuvo menos votos, pero más electores porque ganó en los lugares en los que debía hacerlo.

Un repaso de los distritos clave para llegar a los 270 electores necesarios para obtener la Presidencia muestra lo siguiente:

Florida: Desde 1992, el que ganó Florida, ganó la Presidencia. Biden lleva una mínima ventaja de 1,5 puntos según el promedio de encuestas del sitio Real Clear Politics. Para Trump es obligatorio ganar allí, porque Biden va al frente en casi todos los otros distritos competitivos. Tiene 29 electores, sólo menos que California, Texas y Nueva York. Los republicanos apuestan a los votos del norte del estado mientras que los demócratas son fuertes en el sur.

● **PENNSYLVANIA:** Trump, en 2016, fue el primer republicano en ganar este estado industrial desde 1988. La ventaja de Biden se redujo a 3,8 y es clave para sus pretensiones obtener los 20 electores de ese distrito que Hillary Clinton perdió por una mínima diferencia hace cuatro años.

● **OHIO:** Hace cuatro años, Trump obtuvo

un amplio triunfo a pesar de que en las dos elecciones anteriores había ganado Barack Obama. Ningún republicano llegó a la Casa Blanca sin ganar Ohio y ahora las encuestas le dan a Biden una ventaja de 2,4 puntos en la puja por obtener sus 18 electores.

● **MICHIGAN:** En este estado identificado con la industria automotriz, que había votado por los candidatos demócratas desde 1992, Trump logró su victoria más sorpresiva y ajustada en 2016. Ahora la ventaja de Biden en los sondeos es de casi 6,5 puntos por lo que podría recuperar a sus 16 electores para la columna demócrata.

● **GEORGIA:** Este estado sureño, que favoreció a los republicanos en las últimas seis elecciones presidenciales se incorporó este año a la lista de los distritos competitivos. La ventaja de Trump no llega siquiera al 1% y los demócratas, que cuentan con el fuerte apoyo de los afroamericanos, aspiran a quedarse con los 16 electores.

● **CAROLINA DEL NORTE:** Un distrito de tradición republicana, que cuenta con 15 electores, integra ahora el lote de los que se prevén reñidos porque la diferencia a favor de Biden es de 0,7 punto.

● **ARIZONA:** De las últimas doce elecciones, los demócratas ganaron sólo la de 1992 con Bill Clinton. Pero el peso del voto latino le está dando ahora una ventaja a Biden de 5 puntos. Hay 11 electores en juego y un triunfo demócrata sería una de las sorpresas de las elecciones.

● **MINNESOTA:** La última vez que ganaron allí los republicanos fue en 1972, pero Trump perdió por una mínima diferencia en 2016 y ahora va en busca de la revancha y obtener 10 electores, aunque viene atrás en las encuestas.

● **WISCONSIN:** Un estado tradicionalmente demócrata, tanto que Hillary siquiera visitó en 2016 (por lo que todavía la critican), le dio sus 10 electores a Trump en 2016, pero ahora los sondeos favorecen a Biden por casi 7 puntos ▲

Derechos electorales en EE.UU.



TENSION Las próximas presidenciales podrán no ser las más trascendentes de la Historia, pero serán las que tengan más impugnaciones

por Valeria L. Carbone (*)

El 3 de noviembre se llevarán a cabo las elecciones presidenciales en Estados Unidos. Muchos analistas auguran una masiva participación y se espera se superen los índices de electores en relación a ciclos pasados.

Tomando como parámetro las elecciones legislativas de 2018, encontramos que el 67% de la población “elegible” (que cumple con los requisitos de empadronamiento según el lugar de residencia) se registró para votar ese año. Sin embargo, sólo el 53% de ese padrón, compuesto por 153.07 millones de personas, efectivamente ejerció su derecho al voto.

En un intento por explicar la “masiva participación electoral” y la “oleada demócrata” que no fue, muchos refirieron a la “(ir)relevancia de las elecciones de mitad de mandato” (en las que “solo” se renovaba 1/3 del Senado y la totalidad de la Cámara de Representantes) y se alegó que las participaciones electorales masivas eran cosa de los comicios presidenciales. No obstante, en 2016 la participación electoral apenas había superado el 60%. Lo que sí puso en primer plano el ciclo electoral 2018 fue un tema que académicos e investigadores preocupados por la democracia estadounidense vienen denunciando desde 2013, luego de la sentencia de la Corte Suprema de Estados Unidos en el caso *Shelby County vs Holder*: los problemas en el ejercicio del derecho electoral. En el fallo, la Corte decidió que las secciones 4 y 5 de la histórica ley de derecho al voto de 1965 eran inconstitucionales. A grandes rasgos, establecían un procedimiento que eliminó las pruebas de alfabetización y los impuestos de capitación en estados con flagrantes antecedentes de discriminación racial, exigiéndoles obtener previa aprobación federal ante cualquier

cambio a sus leyes o procedimientos electorales.

Esto sentó precedente para que se aprobaran cientos de proyectos de ley que directamente violan el derecho al voto tanto en elecciones locales y estatales, como federales. Según múltiples informes del Brennan Center for Justice, en los 50 estados se implementaron restricciones que van desde requerir nuevos documentos de identidad, eliminación o limitación de períodos de votación anticipada, purgas masivas de padrones electorales y restricciones en los procesos de empadronamiento. Por mencionar algunos casos, Florida, después de que un referéndum de 2018 votó por restaurar los derechos electorales a personas que ya habían cumplido condenas penales, no solo dilató la sanción de la ley, sino que la Corte Suprema estatal permitió que el impuesto de capitación que regía para ex convictos permaneciera en vigor. Ohio promulgó leyes que eliminan del padrón a los que no votaron en un período de tiempo prescrito. Kentucky cerró más de 3.500 centros de votación, dejando habilitados menos de 200 en todo el estado. Georgia cerró cientos de centros de votación, redujo el período de votación anticipada, y purgó a casi el 10% del padrón electoral (un millón y medio de personas) entre 2012 y 2016. Según un informe de la American Civil Liberties Union, “la purga” continuó con la eliminación arbitraria de más de 340.000 personas (la mayoría negros y latinos) antes de las elecciones de 2018, y en 2019 se eliminó a otras 200.000. A ello se suma la más reciente polémica en torno a la “votación por correo”, una práctica que se remonta a la guerra civil. Inmersos en una pandemia global y con distritos aún cumpliendo medidas de cuarentena, se anticipa que los votos por correo aumenten considerablemente y se esperaba que varios estados habilitaran esta forma de votación en forma expandida.

Ante ello, Donald Trump afirmó que se oponía a otorgarle fondos adicionales al Servicio Postal para cubrir los costos de una mayor afluencia de votos por correo, alegando el riesgo de “fraude”.

Este sistema de votación contempla numerosas previsiones “antifraude” que incluyen verificación de firma, emisión del voto ante testigos, buzones en locaciones “seguras”, confirmación de residencia del votante, recepción en persona de la boleta, y hasta la certificación notarial del sobre de emisión de boleta. El consenso entre los especialistas parece indicar que estas medidas se han mostrado lo suficientemente eficientes como para que casi no haya evidencias que sostengan la premisa de que la votación por correo aumente el fraude electoral. Datos del US Census Bureau revelan que en 2016 casi un 25% de los votos se emitieron por correo, mientras que en 2018 el porcentaje fue de 23.1. Según el Washington Post, sólo un 0,0025% de esos votos fueron catalogados como “posiblemente fraudulentos”. En un artículo para The Hill, Amber McReynolds, exfuncionaria electoral de Colorado y directora del National Vote at Home Institute, y Charles Stewart, del Massachusetts Institute of Technology, destacaron que en los últimos veinte años, de un total de 1.200 casos de fraude electoral, 204 involucraron votos por correo. De ellos, sólo 143 derivaron en condenas penales, lo que equivale a “aproximadamente un caso por estado cada seis o siete años, o una tasa de fraude del 0.00006%”.

Todo esto sugiere que el “problema” sería otro. Fue el mismo presidente de Estados Unidos el que en una entrevista en marzo de 2020 para Fox News declaró que, de adoptarse ampliamente este sistema de votación a nivel nacional, lo que implicaría una expansión del sistema democrático, “este país nunca volvería a tener un representante republicano”.

Las elecciones 2020 no son ciertamente las “más definitivas” ni las “más importantes” de la historia estadounidense, amén de las circunstancias excepcionales que la rodean. Lo que destaca principalmente a este ciclo electoral es que será el más impugnado. Si la actual Administración logra la reelección, los demócratas gritarán “fraude” desde todos los rincones del país. Y si gana el mayor partido opositor, lo hará el presidente y los grupos de poder a los que representa. Y esto es lo que hace a esta elección de alguna manera “impredecible”. Lo que sí podemos predecir es que este ciclo electoral terminará por consolidar la crisis de representatividad en la que Estados Unidos se encuentra inmerso, con el potencial de transformarse en una abierta crisis de legitimidad. ▀

(*) Doctora en Historia por la Universidad de Buenos Aires, docente de la Cátedra de Historia de los Estados Unidos de América (Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires); investigadora del Instituto Interdisciplinario de Investigaciones e Investigaciones de América Latina (INDEAL) y secretaria de redacción de la revista “Huellas de los Estados Unidos: estudios, perspectivas y debates desde América Latina”

Argentina e India: promesas por cumplir



RELACION Los dos países tienen un vínculo histórico cimentado en coincidencias políticas, pero desde el punto de vista económico sigue por debajo de su potencial

por Tomás Múgica

La vinculación con las principales potencias emergentes está llamada a ocupar un lugar central en el diseño de la estrategia externa de un país mediano como Argentina. Se trata de actores que pueden proveer mercados para nuestras exportaciones e inversiones que contribuyan a la explotación de los recursos naturales, el desarrollo de la industria y la mejora de la infraestructura; también pueden ser socios de primera línea en nuestro desarrollo científico-tecnológico y aliados políticos en la demanda de un orden internacional más igualitario.

Uno de esos socios, al que todavía se presta insuficiente atención en nuestro país, es India. Los atributos de poder que vuelven a ese país un jugador de peso en el orden internacional emergente son contundentes: con 1.360 millones de habitantes, es el segundo país más poblado del mundo; por su ritmo de crecimiento, en pocos años más será el primero. Representa un 3,3 % del PBI mundial que -aunque lejos del 15,5% de China o el 23,6% de Estados Unidos- la sitúa como la quinta economía del mundo y la mayor potencia del sur de Asia. Desde sus reformas económicas en los '90 -liberalización de un modelo de desarrollo en el cual sin embargo el Estado conserva un rol central- ha logrado tasas de crecimiento importantes; entre 2000 y 2019 se ubicó en torno al 6,5% anual (este año, debido a la pandemia, caería 4,5%, según el FMI). Es un jugador de clase mundial en áreas como el software, la industria farmacéutica, la energía nuclear y el desarrollo aeroespacial, así como en sectores más maduros, como el siderúrgico y el automotriz. También es una potencia nuclear, responsable del tercer gasto militar a nivel global.

Luego de su independencia de Gran Bretaña en 1947, India logró construir una democracia en una sociedad marcada por grandes



El primer ministro Modi estuvo en Argentina con motivo de la reunión G20

desigualdades sociales y una enorme diversidad lingüística y religiosa, que en algunos casos deriva en tensiones y enfrentamientos. A nivel internacional, forma parte de una región conflictiva: a su enfrentamiento con Pakistán -que marca el nacimiento de ambos países como Estados independientes- se suman las disputas fronterizas con China. Desde comienzos del Siglo XXI, se acercó a Estados Unidos y hoy juega un rol central en el esquema de alianzas mediante el cual ese país busca contrapesar el creciente poderío chino en Asia; ello sin abandonar un vínculo

histórico con Rusia, su principal proveedor de armas. Más allá de su entorno inmediato, en el juego global la política exterior de India se ha caracterizado por la defensa de relaciones internacionales más igualitarias y por la búsqueda de autonomía frente a los grandes jugadores del sistema. Un hito en esa trayectoria fue la creación del Movimiento de Países No Alineados (MNOAL) en el cual la India de Nehru jugó un rol central.

ARGENTINA E INDIA: HISTORIA Y PRESENTE
El vínculo entre Argentina e India es sólido y

de larga data, pero por una diversidad de razones- que van desde el foco de cada uno en su región hasta las crisis económicas y políticas domésticas- no ha logrado realizar su potencial.

En 1949, durante el primer gobierno de Perón y apenas dos años después de su independencia, la India estableció su primera embajada en nuestro país; Argentina abrió su embajada en Nueva Delhi en 1950. En el mundo de la Guerra Fría, ambos países mostraron tempranas coincidencias en la visión del sistema internacional: Jawaharlal Nehru y Juan Domingo Perón abogaron por ampliar las posibilidades de desarrollo autónomo respecto a Estados Unidos y la URSS.

En las décadas siguientes -hasta los '90- las relaciones con India se sostuvieron en diversas visitas e intercambios, pero sin superar un umbral declarativo (Rubiolo y Baroni 2017)^[1]. Destacamos algunos hitos: en 1961 Arturo Frondizi fue el primer presidente argentino en visitar India, donde fue recibido por Nehru. Allí destacó coincidencias en cuanto a la necesidad de un orden internacional más igualitario y pacífico, pero no se lograron avances sustantivos en el vínculo bilateral. En 1966 Miguel Angel Zavala Ortiz, canciller en el gobierno de Arturo Illia, visitó India y firmó el primer convenio comercial entre ambos países; en 1968, Onganía recibió en Buenos Aires a la Primer Ministro Indira Gandhi; en 1973 Argentina ingresó al Movimiento de Países No Alineados, uno de cuyos principales impulsores era India. Tras el pronunciamiento indio a favor de Argentina en el conflicto por Malvinas, en 1983 Reynaldo Bignone, último presidente de la dictadura militar, visitó India en oca-

sión de un encuentro del MNOAL.

El viaje de Raúl Alfonsín en 1985 marca un intento de llevar la relación a un nuevo nivel; se firma una serie de convenios bilaterales en materia comercial, cultural y científico-tecnológica. Pero es a partir de los '90, en el contexto de Posguerra Fría y de reformas económicas en ambos países, que la relación adquiere mayor impulso. Como parte de una estrategia de diversificación de vínculos en clave económica, Carlos Menem visitó India en 1994; en 1995 el Primer Ministro Narasimha Rao vino al país.

Durante las presidencias de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner la relación bilateral se afianzó. En 2009 se firmó un Acuerdo Preferencial de Comercio entre India y Mercosur; ese mismo año CFK visitó India. En 2010 se firmó un acuerdo de cooperación en los usos pacíficos de la energía nuclear, que tendría un resultado concreto: la construcción de una planta de radiación de isótopos en Mumbai a cargo de INVAP.

Como en otros aspectos, a pesar de las críticas a la política exterior de sus antecesores, Mauricio Macri continuó por la misma senda. En 2019, en ocasión de su viaje a India, se acordó elevar la relación al nivel de Asociación Estratégica, tal como había sucedido con China y Rusia. Se firmaron una serie de acuerdos en las áreas más importantes de trabajo conjunto: energía nuclear, tecnología aeroespacial, cooperación agrícola, presencia en Antártida (ambos países son parte del Tratado Antártico), software y medicamentos.

La agenda de comercio e inversiones muestra mejoras, pero sigue por debajo de su potencial. El comercio ronda los 3.000

millones de dólares; es superavitario para nuestro país (2.330 millones de exportaciones) y con una estructura poco compleja: Argentina exporta aceite de soja, aceite de girasol y metales (especialmente oro) e importa aceites de petróleo, herbicidas, insecticidas y fibras de poliéster. Las inversiones también son modestas, aunque crecientes: diversas compañías indias, en sectores como desarrollo de software y soluciones de IT, química y farmacéutica y equipos de transporte operan en Argentina (TCS, CRISIL, Cognizant, UPL, Glenmark y Royal Enfield son algunas de ellas) y otras demuestran interés en invertir, como sucede en el sector minero, especialmente en el litio. Techint, Globant y Bagó son compañías argentinas con inversiones en India.

Finalmente, a nivel político Argentina e India comparten participación en importantes ámbitos multilaterales, como el G-20, y demuestran un interés común -aunque no estén necesariamente de acuerdo en las soluciones- en la reforma de las instituciones internacionales como el Consejo de Seguridad de la ONU.

En resumen, India es un socio de primer nivel con el cual nuestro país debe trabajar y sobre el cual necesitamos conocer más. Un vínculo que ofrece importantes oportunidades para nuestro desarrollo, al tiempo que presenta -al menos por el momento- menores condicionalidades políticas que otras relaciones. ▀

^[1] "Trayectoria de la inserción argentina en India y el Sudeste de Asia", Revista SAAP, Vol. 11, N° 1, junio 2017, pp.103-126



POTENCIAMOS PROYECTOS

ENERGÍA RESPONSABLE

El Programa Pymes PAE colabora, desde hace 15 años, con el fortalecimiento y desarrollo de empresas de la región sean o no proveedoras de la compañía. En el último año, más de 4.600 personas participaron de las actividades de formación y capacitación.

Si hay energía, hay vida. Si hay responsabilidad, hay futuro.



Energía responsable

Ampliamos el Plan DetectAr.

Si estuviste en contacto con una persona que dio positivo en coronavirus, hacete el test.

Para cortar la cadena de contagios, aumentamos los testeos. Aunque no tengas síntomas, si pasaron 7 días desde que tuviste el contacto acercate a un Dispositivo DetectAr.

Buscá el más próximo a tu casa en buenosaires.gob.ar/detectar



Buenos Aires Ciudad



Tomemos distancia



Vamos Buenos Aires